

Producción agraria y políticas públicas en las comunidades campesinas del norte del valle Calchaquí (Cachi, Salta)



Gimena Alé Marinangeli

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
gimemarinangeli@gmail.com

Ignacio Plastiné Pujadas

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
ignacio_plastine.homam@hotmail.com

Fecha de recepción: 31/10/2015. Fecha de aceptación: 04/04/2016

Resumen

El departamento de Cachi se ubica en el centro-oeste de la provincia de Salta, en el norte del valle Calchaquí. La mayor parte de sus pobladores vive en zonas rurales y se dedica a la agricultura bajo riego como principal actividad económica. Las características históricas, culturales, sociales y ambientales configuran una particular organización productiva campesina que se manifiesta, entre otras cosas, en el tipo de cultivos que se producen y su destino, las formas de trabajo, la relación de los productores entre ellos y con la tierra, etc. En este marco, nos proponemos explorar la producción agraria campesina del departamento de Cachi y su articulación con las políticas públicas destinadas al sector. Para afrontar este objetivo, recurrimos a fuentes bibliográficas tanto de las páginas web oficiales del Estado, como de distintos autores que trabajan el tema e información de entrevistas y observación participante recabada en trabajos de campo en la zona. Planteamos la importancia de que el diseño y ejecución de políticas públicas consideren la realidad local y las necesidades de los productores beneficiarios.

Palabras clave

Cachi
Campesino
Agricultura familiar
Políticas públicas

Agricultural production and public policy in Northern Calchaquí Valley (Cachi)

Abstract

The Cachi Department is located in the center-west of the Province of Salta, in the north of Calchaquí Valley. Most of its people live in rural areas and make their living off irrigated agriculture. The historical, cultural, social, and environmental features configure a particular organization of campesino production that is manifest, among other things, in the type of crops produced and their destinies, forms of work, and the relations of producers to one another and to the earth, etc... Within this framework,

Key words

Cachi
Peasant
Family farming
Public politics

we explore campesino agrarian production in the Cachi Department and its articulation with the public policies aimed at the sector. To do this, we employ bibliographic sources, including state records and web sites, the works different authors that have researched the issue, and information gleaned from interviews and participant observation collected in the course of fieldwork in the area. We argue that the design and execution of public policies must consider the local reality and the needs of the producers that will benefit from them.

La producción agrícola y las políticas públicas en los municipios rurales actuales del norte de la valle Calchaquí (Cachi, Salta)

Résumé

Mots clés
Cachi
Agriculteur
Agriculture familiale
Politiques publiques

Le département de Cachi est situé au centre-ouest de la province de Salta, au nord de la Vallée Calchaquí. La majeure partie des habitants vivent dans des zones rurales et pratiquent l'agriculture d'irrigation comme activité économique principale. Les caractéristiques historiques, culturelles, sociales et environnementales de ce département y configurent une organisation productive paysanne particulière qui se manifeste, entre autres choses, dans le type de cultures pratiqué et leur destination, les formes de travail, la relation des producteurs entre eux et avec la terre, etc. Tenant compte de ce cadre, nous proposons d'explorer la production agricole rurale du département de Cachi et son articulation avec les politiques publiques concernant ce secteur. Pour atteindre cet objectif, nous recourons aux sources bibliographiques tant des pages web officielles de l'État que de divers auteurs qui ont travaillé sur le thème et à l'information résultant des entretiens, de l'observation participante effectuée dans le travail de terrain dans la région. L'importance de ce que le dessein et l'exécution des politiques publiques considèrent comme la réalité locale et les besoins des producteurs qui en bénéficient.

Introducción

El departamento de Cachi se ubica en el norte del valle Calchaquí, al centro-oeste de la provincia de Salta. Comprende los municipios de Cachi y Payogasta con dichas localidades como cabeceras, sumados a pueblos y parajes rurales que concentran en total alrededor de 7.000 habitantes (Dirección General de Estadísticas de Salta, 2013). La población es en gran parte rural –64%– (*ibid.*) y se dedica en mayor medida a las actividades productivas campesinas, como la agricultura bajo riego y la ganadería ovina y caprina que complementan la economía familiar (Manzanal, 1987; Obschatko *et al.*, 2007; Cieza, 2010; Pais, 2011). Al igual que otras zonas del valle, se producen tanto cultivos para el mercado –pimiento para pimentón, poroto, tomate, quinoa, cebolla, vid, entre otros–, como para autoconsumo, entre los que se destacan los cultivos tradicionales andinos como las variedades de papa, maíz y el trigo que, a pesar de ser introducido, está muy presente en la memoria de los pobladores como característico del lugar y de sus vivencias.

Si bien en la comercialización de la producción agrícola intervienen tanto los pequeños productores como sectores empresarios (además de otros actores indirectamente asociados), cada uno lo hace con su propia especificidad. De todos modos, como refiere Pais (2011), en el departamento de Cachi “aun predomina la agricultura como estilo de vida sobre las formas de agricultura como negocio” (*ibid.*: 238). La figura del

campesino adquiere un rol central en estos sistemas productivos y es la categoría que más representa al productor que caracterizaremos en esta zona. No obstante, para los fines analíticos se abordarán otras categorías que identifican a los mismos sujetos como “pequeño productor” o “agricultor familiar”. Estas distinciones están asociadas a diversas lecturas que se hacen de estos colectivos sociales, tanto desde los sectores académicos como estatales, influyendo directamente en la manera de pensar y dirigir acciones políticas (Hocsman, 2010; Fernandes, 2013).

En la bibliografía consultada se encuentran puntos en común entre las cuantiosas definiciones existentes de sujeto campesino en cuanto al uso de la fuerza de trabajo familiar para la producción –que puede ser destinada tanto para el autoconsumo como para el mercado– y una escasa o nula acumulación de excedentes (Shanin, 1976; Llambí, 1981; Mayer, 2004). Schejman (1980), en tanto, enfatiza estos rasgos propios de la racionalidad campesina, que tienen como objetivo la reproducción de las unidades productivas familiares, y que difieren de la lógica empresarial, por más que orienten parte de sus productos a la mercantilización. El grupo doméstico, entendido como “...un sistema de relaciones sociales que, basado en el principio de residencia común, regula y garantiza el proceso productivo” (Archetti y Stölen, 1975: 51), es la base de la organización de estos colectivos (Godelier, 1974). Las relaciones de parentesco intervienen también regulando el acceso a la tierra, los recursos y conocimientos que permiten perpetuar las prácticas productivas (Hocsman, 2010).

Según Ringuélet (1991), la denominación de campesino se ha utilizado en mayor medida para aludir a las realidades de otros países de Latinoamérica, mientras en la Argentina se ha recurrido a conceptos con menores implicancias teóricas. Así, tanto desde los sectores académicos como gubernamentales, la mirada hacia el sector rural estuvo dirigida hacia aquellos sujetos que aportaron al desarrollo agrario nacional, como los colonos, chacareros, *farmers* y agricultores familiares, tomando como referencia a los representantes de la agricultura pampeana (Paz, 2010). Una de las denominaciones de carácter general es la de “pequeño productor familiar”, es decir, aquel que cuenta con mano de obra familiar y escasos recursos y capitalización para el proceso productivo, con poca o nula acumulación de capital (Carballo *et al.*, 2004). Por otro lado, Tsakoumagkos *et al.* (2000) caracterizan a los pequeños productores al igual que los campesinos, como grupos heterogéneos de familias productoras que participan en forma directa del proceso productivo, no contratan mano de obra permanente y tienen limitaciones de tierra, capital y tecnología. Sin embargo, Obschatko *et al.* (2007) señalan que esta denominación es ambigua, dado que se solapan aspectos que conciernen a una amplia gama de sectores de pequeños productores agropecuarios, productores familiares, campesinos, etc. Dichos autores precisan las condiciones para definir a los pequeños productores agropecuarios y establecen tipologías a fin de dar cuenta de la especificidad de cada una y de la gran heterogeneidad del sector. Entre las condiciones que enumeran como propias de los pequeños productores agropecuarios aparecen el tamaño de la explotación agropecuaria, el trabajo directo del productor y la ausencia de trabajadores no remunerados permanentes, además de no contar con determinadas personerías jurídicas (*ibíd.*).

De todos modos, la categoría que ha tomado fuerza desde hace unos años en la Argentina es la de “agricultor familiar”, tanto en ámbitos políticos y organismos del Estado, como en la academia (Hocsman, 2010; Paz, 2011), y es a su vez con la que se representan los pobladores de Cachi. La agricultura familiar como sector agrario se caracteriza por

(...) el uso de la mano de obra familiar en el proceso de producción, una cierta capacidad de acumulación, la propiedad de la tierra, su transferencia a través de la herencia y un nivel de tecnificación en las tareas agrícolas (...). (Paz, 2010: 300)

Asimismo, hay definiciones que contemplan la diversificación del trabajo más allá de las labores agrícolas, considerando el complemento con otras actividades a través del pluriempleo (Torres Adrián, 1985).

Esta amplia categoría incluye tanto a los campesinos como a los *farmers* o productores capitalizados, ocultando la diversidad de cada uno, por lo que las implicancias del concepto conllevan un debate controvertido en cuanto a los actores como sujetos de derecho (Hocsman, 2010, 2014). Los autores señalan que el uso de estas categorías modernas en reemplazo del “campesino” en ámbitos institucionales y estatales, invisibiliza las luchas sociales y la historia que caracteriza a este sector social y que lo empodera como sujeto de acción (Hocsman, 2010, 2014; Barbeta *et al.*, 2012). Estos últimos mencionan la importancia de recuperar el término campesino, dado que existen poblaciones que se reconocen e identifican como tales y cuyo desplazamiento se promovió a partir del avance del modelo agroexportador.

Sin embargo, en los trabajos académicos actuales se han superado los planteos acerca de la existencia y el devenir del campesinado frente al desarrollo del capitalismo, mientras que las propuestas se orientan a caracterizar al sujeto campesino y sus estrategias de articulación (Cáceres, 2003). Esta mirada supone dirigir la atención tanto a los procesos del capital como a las estrategias de resistencias del sector campesino, que se diferencia y recrea producto de estas fuerzas contrapuestas (*ibid.*, Paz, 2006; Hocsman 2010, 2014; Guzmán Gómez, 2014). En este sentido, se reconocen dos modelos de análisis en el ámbito latinoamericano para profundizar en el desarrollo de estas cuestiones. Desde el paradigma de la Cuestión Agraria por un lado, se plantea al campesinado como un sector que se mantiene subalterno, diferenciándose y resistiendo al capital. Esta posición conlleva reconocer la existencia de conflictos y disputas inherentes entre los sectores por el uso de la tierra y los recursos (Fernandes, 2004). En este contexto, Hocsman plantea la cuestión del uso de la categoría “campesino” como un símbolo de estas luchas de poder, dado que la visibilización de este sector se

(...) torna particularmente incómodo para un modelo de producción dominante que ignora la diversidad cultural y productiva existente dentro del sector agropecuario, y pretende (o desea) verlo constituido por productores “viables” en consonancia con los planteos del paradigma de capitalismo agrario. (Hocsman, 2014: 292)

Asimismo, este proceso de sustitución del concepto de campesinado por el de agricultura familiar se hace extensivo a las políticas de desarrollo rural en los gobiernos de casi toda América Latina (Fernandes, 2013).

De esta manera, la adopción de la categoría de Agricultor Familiar es una postura enmarcada en el paradigma del Capitalismo Agrario de la etapa neoliberal de la década de los 90, con grandes implicancias tanto en el desarrollo de políticas públicas como en las mismas organizaciones de productores y en el ámbito académico (Fernandes, 2004; Hocsman, 2010, 2014). De acuerdo con este modelo, el capitalismo ha llegado a un desarrollo tal que no comprende que sobrevivan sectores que no estén adecuados y participen de este sistema. Por tanto, el campesino para continuar su existencia debe transformarse en un agricultor familiar, integrado al capital. De esta manera, las acciones de desarrollo rural estarán orientadas a la integración del sector de los agricultores familiares al modelo capitalista imperante (Fernandes, 2004).

De todos modos, hay acuerdo en reconocer en nuestro país el aporte de la agricultura familiar en lo referido a la visibilización y al dinamismo que se les ha dado a estas formas productivas dentro del sector agropecuario y a la importancia de su constitución como destinatarios de políticas públicas orientadas a la mejora de las

condiciones estructurales y sociales, estimulando acciones de desarrollo (Paz, 2010; Hocsman 2010, 2014; País, 2011; Nogueira, 2013). Desde el Estado nacional, entre otras acciones, se ha impulsado en este nuevo milenio una serie de estudios para el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios –PROINDER– a fin de definir a los sujetos y realizar un estado de la cuestión del sector, cuantificar la pequeña producción agropecuaria en base a información del Censo Nacional Agropecuario (2002) y visualizar su participación en la economía nacional (Tsakoumagkos *et al.*, 2000; Obschatko *et al.*, 2007; Soverna *et al.*, 2008).

En este marco de situación, nos proponemos como objetivo explorar las características de la producción agraria campesina en el departamento de Cachi (Salta) y su relación con el Estado a través del análisis de las políticas públicas destinadas al sector. Nos preguntamos si dichas políticas contemplan la integridad del sujeto campesino, más allá de las implicancias de los términos teóricos que utilicen.

Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica y documental de estas cuestiones, lo que se integró a la información procedente de entrevistas y observaciones participantes recabadas en trabajos de campo realizados en diversos pueblos y parajes del departamento de Cachi durante septiembre y octubre de 2014 y 2015, respectivamente. Estos trabajos se enmarcan en el avance de la tesis doctoral de la primera autora denominada “Cambios, continuidades y resignificaciones en la producción agrícola-ganadera campesina del sector norte del valle Calchaquí (Salta)”. Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a personas representativas de la temática a investigar –aquellos que trabajan la tierra o provienen de familias productoras y/o forman parte del diseño, control o ejecución de las políticas públicas–. Se han entrevistado personas de ambos géneros; desde adolescentes hasta adultos y en diversos contextos y parajes de los municipios de Cachi y Payogasta.¹

El trabajo presenta, en primera instancia, una pequeña caracterización de la producción agrícola de Cachi y sus pobladores, sumada a una breve reseña histórica sobre la introducción de distintos cultivos en la zona, para luego pensar los programas dirigidos a la región desde el Estado. La información de dichos programas y políticas proviene tanto de páginas oficiales de los organismos estatales involucrados, de entrevistas con agentes estatales, como así también de bibliografía consultada e información de las entrevistas realizadas a los campesinos.

La producción agrícola en el norte del valle Calchaquí

El departamento de Cachi comprende una zona agroeconómica homogénea llamada Valle Calchaquí Salteño (INTA, 2008), que tiene como base económica la agricultura bajo riego, sumada a la ganadería ovina y caprina que complementan las actividades productivas (Manzanal, 1987; Obschatko *et al.*, 2007; Cieza, 2010; País, 2011).

El pimiento para pimentón es el cultivo comercial característico del valle; su producción representa más de dos tercios del total nacional, posicionando la región como la principal productora (Cieza, 2010). También son muy significativos los emprendimientos empresariales en torno a la vitivinicultura e incluso se ha conformado una ruta del vino para promocionar este tipo de turismo (País, 2011). Por otro lado, las hortalizas, legumbres, forrajeras y algunas aromáticas también son cultivos característicos y se hallan en las extensiones del área de riego del valle (Manzanal, 1987; Cieza, 2010; País, 2011).

El espacio agrario se ha ido configurando a través de un largo proceso histórico que tiene sus orígenes en la población prehispánica de la zona (Tarragó, 1977; Páez *et al.*, 2012). La instalación de las haciendas coloniales y las fincas en el período nacional ha aportado la presencia de latifundios en la estructura agraria actual (Lera, 2005; Mata de López, 2005; Pais, 2011). Estas estructuras se establecieron como grandes haciendas a fines del siglo XVII en el valle Calchaquí y habrían marcado el origen del campesinado en esta zona y su consolidación posterior con la formación del Estado Nación (Lera, 2005; Mata de López, 2005; Pais, 2011). Las familias propietarias estaban dotadas de un gran poder y se vincularon al comercio regional (Lera, 2005). En este marco, las actividades se orientaron a la cría de ganado mular, ovino y vacuno, además de la producción de vinos y cultivos de cereales como el trigo para hacer harinas (Mata de López, 2005). A fines del siglo XIX, el cultivo de este cereal se redujo debido a la calidad y el éxito que alcanzó en la región pampeana y su llegada a esta región por medio del ferrocarril. La producción de cultivos forrajeros, en cambio, adquirió auge debido a la importancia del valle como lugar de invernada y como paso estratégico en el intercambio comercial de ganado hacia Chile (Lera, 2005).

En las entrevistas realizadas, observamos que las personas de mayor edad –entre 74 y 81 años–, recuerdan aún que sus padres o abuelos cruzaban ganado a Chile en grandes travesías que duraban meses. Rememoran también que cuando eran pequeños, muchos de ellos vivían en las fincas de los patrones y producían prácticamente todo lo que consumía la familia. La figura paterna debía trabajar como peón mientras la unidad doméstica vivía en la misma finca, y tenían permitido tener su huerta y algunos animales en condiciones de “arrendamiento”.² En esa época no contaban con comercios cercanos en los cuales se pudieran comprar harina y otros productos ligados al mercado global. Así, comentan que el pan, por ejemplo, se hacía en el grupo familiar con la harina proveniente del trigo cosechado por ellos mismos y procesado en molinos artesanales cercanos. Cultivaban distintos tipos de verduras y frutas, hilaban y tejían su ropa, criaban vacas, ovejas y cabras de las que obtenían carne, lana y leche con la que producían quesos, entre otras cosas. Refieren varias preparaciones tradicionales como chicha, humita y quesadillas con las distintas variedades de maíces; así como patay y aloja con la algarroba. Si bien actualmente tanto la variedad como la cantidad de estos alimentos ha disminuido, de acuerdo con los discursos y prácticas de los pobladores, se aprecia que la importancia de estos productos tradicionales está muy presente en las festividades, en la adscripción identitaria manifestada en los relatos, imágenes u objetos con los que se ven reflejados, y cuestiones de apego a la tierra. De todos modos, los entrevistados coinciden en que las prácticas más tradicionales (como la trashumancia) se conservan en mayor medida en la zona de los cerros.

Para fines del siglo XIX, la superficie del actual departamento de Cachi se distribuía prácticamente en dos grandes haciendas, que fueron posteriormente expropiadas a mediados y fines del siglo XX. Esto permitió que muchos campesinos accedieran a la tenencia de la tierra, aunque no hubo cambios sustanciales respecto de las relaciones sociales (Pais, 2011). Es frecuente en las entrevistas realizadas a personas mayores, hablar con estima del patrón de la finca donde trabajaban, incluso señalando que “les han enseñado a trabajar las tierras”.

Actualmente, pocos propietarios concentran la mayor parte del territorio del departamento, mientras que, por otro lado, los campesinos cuentan con algunas tierras, muchas veces con la tenencia de la propiedad irresuelta (Manzanal, 1987; Pais, 2011). Manzanal (1987) para la década del 80 menciona que

(...) el 92% de los propietarios no superan la unidad económica familiar, son minifundistas y sus parcelas tienen en promedio apenas 2,5 hectáreas. En el otro extremo, apenas un 5% de los propietarios tienen en su poder más de la mitad de la tierra cultivada bajo riego –56%–. (*ibid.*: 20)

En la actualidad esta tendencia continúa si se considera la situación general del Noroeste, en que la presencia de pequeños productores supera el 80% de las explotaciones agropecuarias, mientras la superficie que ocupan es apenas el 17% de ellas, es decir que cuentan con una reducida extensión para realizar sus actividades (Censo Nacional Agropecuario [CNA], 2002). En este sentido, Obschatko *et al.* (2007) realizan una comparación respecto al devenir de las explotaciones agropecuarias de los pequeños productores entre los CNA de 1988 y 2002, en los que se refleja que para el Noroeste no hubo una gran reducción en la cantidad de las explotaciones, pero sí una retracción en la superficie de las mismas, mostrando el avance del proceso de concentración del territorio.

Los sectores terratenientes cuentan con unidades económicas empresariales, cuyos dueños no trabajan directamente las tierras pero se dedican a producir para el mercado y disponen para ello con tecnología más compleja que les ofrece mejores rendimientos, además de contar con información de sistemas comerciales y financieros que los hace comercializar en mejores condiciones (Sola, 1987). Este sector terrateniente reproduce las relaciones de dominación de los grandes latifundios al establecer contratos con los campesinos (Cieza, 2010; Pais, 2011).

La mayor parte de los campesinos entrevistados es propietaria de su tierra. Según una asistente técnica del Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales), cada campesino trabaja pocas hectáreas, entre dos y seis a ocho por productor, aunque los entrevistados nos mencionaron de tres a diez. Esta información es coincidente con los datos relevados por Cieza (2010) para el departamento adyacente de Molinos, en el que para el caso de campesinos propietarios la extensión de su parcela oscila entre una y cuatro hectáreas. Tanto la representante del programa, los responsables municipales así como los campesinos, reconocen la preocupación tanto por la escasez de tierras como por la tenencia precaria de la propiedad que predomina en la región (Manzanal, 1987; Pais, 2011), lo que los obliga a establecer contratos formales o informales para tomar en arrendamiento parcelas de tierra pertenecientes a grandes terratenientes o “poner en sociedad”³ con sus dueños. Como apunta Paz (2006), el campesino ha estado involucrado en diversas formas productivas, como la hacienda, la plantación y la estancia en su rol como proveedor de fuerza de trabajo y productor de su propio sustento, adaptando sus estrategias de reproducción social a los contextos cambiantes (Paz, 2006).

Más allá de la tierra como propiedad, es importante considerar la relevancia que adquiere en los sistemas campesinos y lo que significa en su cosmología. La tierra adquiere valor de uso, no se percibe como una mercancía que pueda comprarse y venderse, sino que incluso se accede a través de las relaciones de parentesco (Hocsman, 2010). Las familias productoras que hemos visitado, constituyen una “típica unidad de producción y consumo” (Pais, 2011: 218), conforme a los sistemas productivos campesinos. En esta organización productiva, la unidad doméstica constituye la principal mano de obra y es a su vez destinataria de los productos (Mayer, 2004; Pais, 2011). Se encuentran allí la vivienda y el espacio doméstico de reunión de la familia, la huerta asociada a este lugar y los corrales de aves, caprinos u ovinos. En estos espacios, suele ser la mujer, con la ayuda de los niños y los jóvenes, quien se encarga de estas labores. El destino de esta producción es el autoconsumo. Muchas veces hemos ido a visitar u hemos observado y profundizado en las entrevistas que los hombres trabajan durante el día en los rastrojos que arriendan o tienen en sociedad, o incluso se emplean en otros ámbitos como el comercial, municipal, construcción, servicios, etc. En estos lugares, generalmente retirados de sus hogares, los campesinos producen para el mercado y son quienes se identifican o mencionan como productores, no así para el trabajo en la huerta doméstica. Por otro lado, en las autoidentificaciones no encontramos el concepto de campesino sino el de agricultor familiar o pequeño productor, reservando

el primero para utilizarlo al referirse a “la gente del campo, que no produce”. Los campos para los pobladores, son espacios no trabajados, agrestes, para referirse al ámbito de producción utilizan la mención de “canchones” o “rastrosos”.

La organización productiva de dichos pobladores está permeada por aspectos propios de los modos de vida campesinos y, además, por cuestiones inherentes a la lógica andina que los atraviesa. Las entrevistas realizadas nos permitieron identificar algunas recurrencias en torno a la organización productiva. Entre las prácticas más arraigadas los entrevistados rememoran los intercambios de productos, que si bien actualmente reconocen que han mermado, están muy presentes en la memoria oral de las actuales generaciones, como un aspecto tradicional importante. Mencionan la “torna” como un tipo de intercambio mediante el cual se prestan la fuerza de trabajo, en momentos en que las familias requieren ayuda para las labores agrícolas. Con algunos comerciantes aún se establecen intercambios o trueque de sus productos por mercaderías, o mencionan que se acercan personas de parajes vecinos, como es el caso de los pobladores de San Antonio de los Cobres, región puneña de la que aportan productos como tejidos y sal que cambian por frutas y otros cultivos locales del valle. Más allá de los relatos, es notoria la combinación, en lo agrícola, de diversos elementos técnicos inducidos como el tractor, agroquímicos, semillas adquiridas mediante la compra, entre otros, con las prácticas tradicionales mencionadas.

Producción agrícola orientada al mercado

Como se ha mencionado previamente, las características de la producción agraria de Cachi han ido cambiando en función de la orientación al mercado, aunque siguen preponderando las formas campesinas de producción (Pais, 2011). Los pobladores optan por cultivos comerciales que han sido incorporados, conservando los cultivos tradicionales para consumo doméstico principalmente. De esta manera, aunque actualmente los principales volúmenes de producción del departamento de Cachi son el pimiento para pimentón y el poroto pallar, los productores campesinos cuentan a su vez con otros como tomate, quinoa, cebolla y alfalfa en orden de importancia; también zanahoria, arvejas y habas, entre otros (Frere, 2004; Pais, 2011), optando por un sistema productivo diversificado. Esta estrategia representa una continuidad en el trabajo con la tierra durante el año así como en la obtención de productos, además de mantener las condiciones fértiles del suelo mediante la rotación de cultivos, que ya existía tradicionalmente (Pais, 2011).

La superficie destinada a cultivos de autoconsumo a lo largo del tiempo ha ido reduciéndose en pos del avance de otros de índole comercial (Manzanal, 1987; Pais, 2011) siendo que “hasta principios de la década del 80, en el siglo pasado, el antiguo esquema productivo del trigo, papa, cebada, alfalfa, maíz, solamente se conservaba aún en las parcelas más alejadas” (Pais, 2011: 221). De todos modos, hemos observado que se reserva en los rastrosos o alrededor de las casas, una parcela para hacer “huerta”, como le llaman los entrevistados al lugar donde siembran distintos cultivos para autoconsumo como cebolla, haba, poroto, arveja, zanahoria, morrón, berenjena, lechuga, tomate, zapallos, etc. A partir de las entrevistas que realizamos se pudo determinar la importancia de cultivos tradicionales como el maíz, la papa, el trigo y la alfalfa, que actualmente se producen en las huertas familiares para el consumo doméstico.

En referencia al circuito comercial, los entrevistados coinciden en los grandes costos que tienen actualmente para producir. Hasta hace pocos años era más frecuente la torna –por lo que no había que pagar jornaleros–, la reutilización de semillas, el uso de abonos naturales y el trabajo manual. Si bien hay quienes temen que las semillas

“de afuera” incorporen enfermedades y otros que consideran que los agroquímicos contaminan la tierra, la mayoría de los entrevistados adquiere los mismos mediante la compra, ya sea en Cachi, en Salta o a través de vendedores que se acercan a los domicilios. Muchas veces, en estos casos, utilizan los fertilizantes, pesticidas y semillas que el comprador demanda, es decir producen de esa manera cuando destinan los cultivos a la venta; mientras para los domésticos reservan los abonos naturales y reutilizan o seleccionan sus propias semillas o las que intercambian. En cuanto a los jornaleros, algunos productores se quejan de que cobran mucho por su trabajo, además de que se les debe proporcionar alimento y bebida. En este sentido se vislumbra, a partir de las entrevistas, la ausencia del Estado al momento de regular y asesorar a los productores respecto a la compra y uso de agroquímicos. Solo algunos campesinos que producen para la venta mencionan haber sido asesorados por agentes del INTA o del municipio respecto a estas cuestiones. Los datos del Censo Nacional Agropecuario realizado en 2002 reflejan esta afirmación, dado que solo el 22,84% de las EAP (explotaciones agropecuarias) del departamento de Cachi ha recibido asesoramiento técnico, en su mayoría de los distintos organismos del Estado, tanto para la agricultura como para la ganadería.

Si bien en general los productores campesinos no están organizados ni resuelven poner condiciones, con la mayor fluidez de comunicación pueden conocer los precios y anticipar incluso qué producto será el mejor pago. De todos modos, son los intermediarios o acopiadores quienes establecen las condiciones de la venta, a las que el productor accede para cubrir los gastos de su producción y comprar lo que le haga falta. Si bien desde el municipio gestionan un piso de precio de los productos junto a la Secretaría de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta y aseguran que la gente esté informada de ello, son los intermediarios quienes efectivamente fijan el precio y, en el mejor de los casos, la gente conserva parte de su producción para procesarla y venderla fraccionada. Dicha estrategia solo la desarrollan algunos campesinos y en un porcentaje bajo, llevando por ejemplo el pimiento a molinos cercanos que son privados, o al de la “Asociación Agroapícola Cachi” de Fuerte Alto, y luego vendiendo a los comercios o en las ferias que se realizan en verano e invierno, durante la temporada turística en la plaza de Cachi.

El municipio de Cachi tiene intenciones de desarrollar un proyecto que aporte molinos y secaderos de uso comunitario, una fraccionadora, lavadora y etiquetadora para producir el pimentón cacheño, aunque se extendería luego su uso a otros productos locales. Si bien esa es la información que pudimos obtener, no están delineadas todavía las condiciones de uso del servicio por parte de los campesinos, ni hay certeza aún de que se lleve a cabo la propuesta. Estos sujetos serían los destinatarios del proyecto, dado que los productores capitalizados cuentan con insumos en sus fincas privadas. En cuanto al molino de la Asociación, fue gestionado a través del Programa Social Agropecuario y actualmente tienen nuevos proyectos con el Gobierno provincial. De todos modos, las condiciones de venta se vuelven desparejas para el productor y muy individuales. Todos los sectores consultados acuerdan en que esta situación responde a la falta de organización y desconfianza hacia las cooperativas (por eso el nombre de “Asociación”). En relación a ello, algunos entrevistados señalan que hay años en los que no tiene buen precio el producto y los campesinos o no se enteran, o tienen reticencia a innovar con otros cultivos. Es en este sentido que adquieren especial relevancia las políticas públicas y la intervención del Estado en la regulación del mercado.

Cultivos de importancia

Dentro de los principales cultivos destinados al mercado, el pimiento para pimentón es el principal cultivo comercial del norte del valle Calchaquí (Manzanal, 1987, 1998; Arqueros y Manzanal, 2004; Frere, 2004; Cieza, 2010; Pais, 2011), y conforma

el mayor volumen de este producto que se comercializa a nivel nacional (Manzanal, 1987; Cieza, 2010). Manzanal (1987) asocia la intromisión del cultivo de pimiento en los valles en la década de 1940, momento en que merma la actividad de invernada del ganado a causa del cambio en la dinámica regional por el funcionamiento del ferrocarril. Si bien Pais (2011) menciona que desde 1930 se producía este cultivo en algunos lugares de la zona, su expansión fue gradual hasta imponerse como opción favorable para su comercialización, debido a su buen rendimiento (Manzanal, 1998; Frere, 2004; Pais, 2011).

Tanto los campesinos como el sector empresario lo producen y comercializan, aunque ambos cuenten con distintas condiciones para su desarrollo. El campesino, por un lado, debe esforzarse en obtener los insumos y realizar un trabajo mayor por la escasa tecnología con la que cuenta, por lo que suele conformarse con la retribución de su mano de obra e insumos, y su meta no es necesariamente obtener ganancia (Bartra, 2006; Pais, 2011). Los empresarios, por otro lado, cuentan con otro nivel tecnológico y comercializan mayores volúmenes de producción. Además, pueden retener la mercadería y alcanzan mejores condiciones de venta, obteniendo mayores rendimientos (Pais, 2011). De todos modos, en Cachi son los campesinos quienes se dedican mayormente a esta producción, mientras que en San Carlos, otro departamento del valle, son los sectores más capitalizados (Pais, 2011).

El poroto pallar constituye el segundo producto en orden de importancia, y es producido también por sectores campesinos y empresarios. Es así que dentro del país, Cachi representa una de las principales zonas productoras de este cultivo (Pais, 2011). Los pobladores hacen una diferenciación en el rendimiento de la producción según se cultive en zonas con mayor o menor salinidad del agua. Mencionan que en el río Calchaquí no es buena la producción “porque el agua es salada”, si bien da mejores resultados la cebolla; el río Cachi y Las Pailas son de agua dulce y allí “se da todo”.

Tanto los productores como los almaceneros de la zona aseguran comerciar entre ellos, aunque algunos entrevistados mencionan haber vendido su producción a acopiadores locales o compradores de otros lugares, y hasta haberla exportado vía Jujuy a Brasil.

Siguiendo en orden de importancia, encontramos tanto la producción de hortalizas, que la realiza la mayor parte de los productores, con cultivos como el tomate, o la quinoa que se ha introducido de manera más reciente. El tomate se incorpora en la década de 1970 por acciones de difusión del INTA de distintos tipos de semillas (Manzanal, 1998). Si bien constituye otra opción, dicho cultivo conlleva más trabajo y dedicación, en especial el tomate platense que es el que demanda el mercado.

En cuanto a la quinoa, si bien es considerado uno de los cultivos tradicionales andinos, los pobladores no lo tienen presente en su memoria oral, dado que en los valles Calchaquíes era prácticamente inexistente (Bayón de Torena, 2010-2011; Cieza, 2010). Según nos comentan los entrevistados y agentes municipales dedicados a la producción, en años recientes se ha incorporado a la producción cacheña, a partir de la promoción por parte de empresarios de la zona interesados por aspectos netamente comerciales. Mientras que en lugares adyacentes, como en el departamento de Molinos, sitio en el que se encuentra trabajando una agencia de extensión rural del INTA, se ha incentivado su producción tanto por sus características nutritivas como por su revalorización histórica y cultural a través de saberes y prácticas tradicionales que conlleva (Cieza, 2010). Según personal del municipio asociado a la producción (y también “agricultor”), a los pobladores les cuesta innovar aunque en el caso de la quinoa ha favorecido su difusión el buen precio que mantuvo durante unos años, además de que requiere poco cuidado. Según ellos, fue una ingeniera de Asuntos Agrarios de Salta a través del municipio la que fomentó la introducción del cultivo.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la alfalfa es uno de los cultivos forrajeros que toma importancia a partir del comercio mular en el siglo XVIII, cuando el valle se consolida como zona de cría e internada de ganado, por su ubicación en su paso para Chile (Lera, 2005).

La alfalfa cumple distintas funciones, se utiliza como alimentación del ganado y para fertilizar la tierra a la que llaman “tierra nueva” tras varios períodos en el rastrojo, según los relatos de los entrevistados. De esta manera, se vuelve fundamental en los ciclos de cultivo de la producción campesina y en la rotación del suelo debido a su aporte de nitrógeno (Pais, 2011). Además de la poca mano de obra y dedicación que requiere, los productores hacen tres cosechas al año y venden o truecan el excedente como forraje para los animales. Existen en la zona productores de alfalfa con mayor grado de capitalización, que tienen el equipamiento necesario para cosechar y enfardar, por lo que, sumado a la mayor extensión de tierras, venden su producto en mayor volumen al sector ganadero y además alquilan el equipamiento a los campesinos para enfardar. Este tipo de productores empresariales que preparan los fardos para la venta ha aumentado en los últimos años (*ibid.*).

La producción vitivinícola es otra de las actividades que datan de la época del establecimiento de las grandes haciendas en el valle, y que actualmente constituye una importante actividad destinada a la venta (Cieza, 2010). Se establecieron grandes bodegas en la zona, incluidas en el circuito turístico de la “ruta del vino” del valle Calchaquí, a partir de las fincas asentadas en la zona, que a veces incorporan también la producción de vid de campesinos locales. Estos últimos han utilizado tradicionalmente la vid para consumo doméstico como fruta fresca, pasas de uva y elaboración de vinos y arropes.

Sobre las políticas agrarias en Cachi

En la bibliografía consultada de los autores que trabajan en la zona, se advierte la ausencia del Estado para realizar acciones destinadas al sector productivo en Cachi (Manzanal, 1987), mientras Pais (2011) generaliza esta cuestión para el sector campesino, que recién en la década de 1980 fue contemplado por las políticas públicas. A continuación se mencionarán algunos de los programas a los que hemos tenido acceso, a través de la literatura de los autores o las páginas web oficiales y los entrevistados.

Para la década del 70 se encuentra como antecedente la Cooperativa de Cachi, creada y gestionada por el gobierno militar con el objetivo de mejorar la comercialización de los pequeños y medianos productores de la zona, mediante la organización del acopio y venta del pimiento. Se sumaron varias dificultades para concretar su propósito, entre ellas la apertura de importaciones de pimiento en esa época, que provocó una retracción en el número de parcelas cultivadas, dado que no podían competir con esos precios (Manzanal, 1987; Pais, 2011). Además de que los productores no participaron en la elección de los delegados, por lo que no se sentían representados, se produjeron diversos casos de corrupción, que generaron desconfianza entre los productores que no pudieron apropiarse de los beneficios que planteaba la cooperativa (Pais, 2011). Esta experiencia fallida aún se conserva en la memoria de los campesinos de mediana y tercera edad, marcando su subjetividad y dejando una impronta tal que descreen de las cooperativas y cuestiones organizativas, por lo que tienden al individualismo en lo que a venta y acopio de los productos se refiere. De todos modos se han conformado organizaciones con otros nombres y, en el caso de los jóvenes, sí se

perciben intenciones entusiastas de conformar cooperativas y proyectos comunales para los pobladores.

Por otro lado, en 1979 se creó la Cooperativa agrícola del Valle Calchaquí en la que participaban pequeños, medianos y grandes productores, acopiando la producción y fijando precios mediante una asamblea, previa consulta con el Estado, los intermediarios e industriales. El Estado provincial participaba además financiando la cooperativa, lo mismo que a la Junta Provincial del Pimiento, creada en 1986. Durante el período inflacionario quebraron las dos organizaciones, dados los graves problemas financieros y al no poder vender la producción y pagarle a los productores, a quienes dejaron endeudados (Manzanal, 1987).

Las acciones del Estado mencionadas para esta época (décadas de 1970, 1980 y parte de 1990) si bien otorgaban escaso interés a los pequeños productores minifundistas, se orientaban a atenuar las condiciones de pobreza que enfrentaba el sector, desde una visión economicista que no contemplaba los aspectos socioculturales, políticos, étnicos, etc. (Manzanal, 1987). La categoría de “minifundista” fue la adoptada por los académicos y el Estado para abordar a estos sujetos, expresándose en la instalación de la Unidad de Minifundio del INTA (1983), y los estudios para cuantificar la población minifundista a partir del Censo Nacional Agropecuario de 1969 (Paz, 2011). Asimismo, Manzanal (1987) señala que la situación del minifundio en la zona es una

(...) situación límite y sumamente dificultosa para su desarrollo. Por esto es que la acción de desarrollo para el área debe ser la promoción de cambios estructurales, una reestructuración parcelaria que permita alcanzar niveles de eficiencia adecuados en los sistemas productivos. (*ibid.*: 28)

A partir de 1986 se visibilizan mayores intervenciones estatales en los sectores campesinos orientadas a promover el desarrollo rural. Desde la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación-SAGyP (junto a la asistencia técnica, financiera y organizativa de otras organizaciones internacionales y provinciales), se creó el Programa de Apoyo a los Pequeños Productores del Norte Argentino, en el que Salta estaba incluida, y particularmente Cachi, con el Proyecto de Desarrollo de los Pequeños Productores de Cachi. Dicho proyecto local tenía como objetivos otorgar financiamiento a los productores, aportar asistencia técnica, capacitar y fomentar la organización de los productores, a fin de incorporarlos al proceso de desarrollo global y elevar la calidad de vida del sector. En este marco, los productores lograron asociarse para cumplir con los requisitos del programa y se conformó la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Cachi en 1986. La participación de los beneficiarios implicaría varios aportes, entre ellos lograr mayor autonomía para la comercialización y relación con otras instituciones, como eran en ese momento la Junta Provincial de Pimentón y Especies y la Cooperativa de Cachi, todas con incumbencias en la organización de la comercialización del pimiento en la zona (Manzanal, 1987). Como se mencionó anteriormente, los entrevistados que vivenciaron esta época, descreen de las organizaciones corporativistas, aunque de esta experiencia relatan que las intenciones eran buenas, que “funcionó en un momento y estábamos entusiasmados pero después se cayó”. Seguramente, el mayor grado de participación de los campesinos en la Asociación y su importancia para la toma de decisiones le ha dado mayor eficacia y confiabilidad, aspectos que deberán abordarse en futuras investigaciones. En este sentido, Manzanal (1987) realiza una evaluación positiva de la implementación del Programa, en tanto se promovió la organización de los productores, se capacitaron técnicos (aunque no así productores), se obtuvo un tractor para uso comunitario a través del INTA, se realizaron obras y mejoramiento del acceso al riego y se gestionó como asociación un puesto para la venta en el mercado de Salta –CoHFRUTOS– y un camión para realizar el traslado, aunque no lograron hacerlo efectivo (Manzanal, 1998),

probablemente por conflictos asociados a la corrupción (Pais, 2011). Como otros aspectos negativos, comenta que el Programa no benefició a todos los productores que se agruparon en la Asociación, no se cumplieron todos sus objetivos, hubo instituciones que no participaron, el acceso a los créditos fue irregular e incluso ineficaz, dado que no contribuyó a mejorar los aspectos estructurales ni las condiciones de comercialización que representan grandes dificultades para el sector (Manzanal, 1987).

La categoría de minifundista comenzó a ser desplazada por la de agricultor familiar, en un contexto de liberalización de los mercados y medidas tendientes a la competitividad del sector agropecuario entre fines de los años 80 y principios de los 90, cuando se conformó el modelo del agronegocio nucleado en la región pampeana, acompañado de la lógica del capitalismo agrario, que invisibiliza y excluye al campesino para centrarse en sujetos agrarios en proceso de transformación (Soverna *et al.*, 2008; Paz, 2010; Barbeta *et al.*, 2012). En este sentido, el enfoque de las políticas desarrolladas por la SAGPyA durante la década del 90 siguió apuntando a mejorar las condiciones de pobreza como motor del desarrollo rural, además de a retener la población rural produciendo en ese medio, ya que las ciudades no podrían absorberla (Soverna *et al.*, 2008). Para superar las carencias del sector, se buscó implementar modelos asociativos para lograr que los agricultores familiares mejoraran sus ingresos y calidad de vida, a través de la modernización y diversificación de sus unidades agropecuarias (SAGPyA, 1997). Desde esta perspectiva, rasgos característicos de la población campesina como el trabajo familiar, el destino de sus productos tanto para el mercado como para el autoconsumo, los modos de labranza y su bajo nivel de capitalización, etc. fueron considerados como carencias estructurales que se debían recomponer con la ayuda de estas políticas. La promoción de formas asociativas a modo de empresas de pequeños productores se orientó a destinar créditos para mejorar sus condiciones, aunque la gran mayoría no pudo acceder a los beneficios debido a que no llegaba a cumplir con los requisitos que se le exigían (Arqueros y Manzanal, 2004).

De esta manera, si bien fueron pocos los recursos que se destinaron a los organismos encargados de la agricultura familiar –de acuerdo con los términos usados por ellos mismos–, se promovieron programas que,

Con la sola excepción de Cambio Rural, todas las acciones de la SAGPyA, los Programas de Desarrollo Rural –PDR– (PSA, PROINDER, PRODERNEA, Minifundio, Prohuerta), tienen como principal criterio de focalización la pobreza rural y, si bien, todas estas iniciativas promueven la producción agropecuaria, el criterio general que orientaba estas políticas era compensatorio. (Soverna *et al.*, 2008: 13)

Con posterioridad a la crisis de 2001, hubo un replanteamiento de la postura que tenía y debía tomar a su vez el desarrollo rural en el país, atendiendo a la diversidad de actores y actividades rurales (*ibid.*). En este marco comenzaron a cobrar mayor importancia en la región diversas ONG, como la Red Valles de Altura, Pueblo Abierto, etc., que trabajaban con distintos organismos estatales (Arqueros y Manzanal, 2004). Por otro lado, desde el MERCOSUR se tomaron decisiones políticas que impulsaron, a partir de 2003, acciones para la agricultura familiar en los países que lo conforman (Soverna *et al.*, 2008). En este marco, en nuestro país se gestaron acciones como la creación del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar-CIPAF durante 2005, con el objetivo de impulsar investigaciones, asesorar y articular entre los actores, además de aportar tecnología para el desarrollo sostenible de este sector. Así, el CIPAF define la agricultura familiar como:

Aquella donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en

la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado. (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, 2005: 6)

Este organismo depende del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA y se encuentra representado en la región del Noroeste –CIPAF NOA–, profundizando en la especificidad zonal de la Pequeña Agricultura Familiar (PAF). La misma se define en tanto forma de producción como un modo de vida que aporta a la soberanía alimentaria de la sociedad en general, entre otros aspectos centrales como la generación de empleo, el arraigo rural y la salud ambiental. En términos generales, este sector vive del autoconsumo, el trueque y comercializa la producción excedente para acceder a otros bienes y servicios que la producción en sí misma no garantiza (CIPAF NOA, 2008).

Por otro lado, se creó en 2006 el Foro Nacional de la Agricultura Familiar-FONAF, un conjunto de organizaciones de productores familiares articulados con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación-SAGPyA, que se planteó generar alternativas para promover políticas de desarrollo rural y la inclusión de este conjunto de productores. Los criterios que utilizan para definir la agricultura familiar como sector agrario se vinculan con la importancia del trabajo familiar en la unidad doméstica y los aspectos culturales y de formas de vida ligados a ella, en las que el principal objetivo es la reproducción social de la familia (FONAF, 2006). Con esta categoría pretenden crear una definición genérica que incluya sectores heterogéneos como: pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, productor familiar, campesinos sin tierra, trabajadores rurales y comunidades de pueblos originarios (*ibid.*).

Una acción política muy significativa es la creación en 2009 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la cual se visualiza una mayor planificación de políticas públicas, además de colocar en el foco central al “agricultor familiar”. Su establecimiento sucede tras la “crisis del campo” de 2008, por lo que la visibilización de este sector representa un avance muy importante (Hocsman, 2010, 2014).

En este nuevo contexto, se continuaron proyectos anteriores como el ProHuerta que se realizaba en la región en conjunto con el INTA desde 1987. Este programa de alcance nacional tiene como objetivo propiciar el desarrollo de huertas destinadas a la autoproducción de alimentos con bases agroecológicas, y la comercialización de excedentes, aspirando a contribuir a la soberanía alimentaria. Se orienta a las familias y organizaciones de las comunidades, atendiendo de forma principal a los sectores vulnerables, a quienes asisten con capacitaciones y brindan insumos como semillas, animales y herramientas. En el departamento de Cachi, la principal actividad del ProHuerta es la organización de productores para asumir diversos emprendimientos, como las ferias de semillas agroecológicas.

Si bien observamos, acorde con Pais (2011) que el INTA “no realiza actividades de desarrollo rural en el ámbito del territorio municipal de Cachi” (*ibid.*: 250), es una de las instituciones del Estado vinculadas al ámbito agropecuario que mayor visibilidad y representatividad tiene entre los campesinos. En las referencias obtenidas en las entrevistas, todos manifiestan tener muy buena percepción de la institución, aunque nos han mencionado situaciones aisladas en que la misma haya desarrollado actividades en Cachi. De esta manera, recuerdan alguna visita de técnicos a una estación experimental que había en la zona, charlas de los mismos en la escuela agrotécnica de Payogasta, en la que han participado desarrollando proyectos con los estudiantes, o alguna gestión que hayan realizado a partir de los encuentros con los campesinos para obtener maquinarias y herramientas para la zona. Respecto a ello, las personas

entrevistadas de Payogasta sugieren que no se han enterado cuál fue el destino de esa propuesta, dado que a ellos no les ha llegado nada. Nos ha pasado, en relación a esta expectativa que tienen los campesinos, que nos asocian con agentes estatales que vamos a visitarlos para “sacar información” o “prometer cosas”. Otra concepción presente en los relatos, es que cuando “llega” un programa, es decir se destina y la población efectivamente se entera de un proyecto estatal, creen que solo accede una pequeña cantidad de gente (algunos manifiestan incluso que no lo necesitan, o que les corresponde por ser amigo de alguien, etc.). Es decir, que hay desconfianza en cuanto a los otorgamientos de los beneficios de los programas, a otros les representa una dificultad cumplir con los requisitos, o creen que no están en condiciones de presentarse, etc. En este sentido, quizá habría que analizar los canales de comunicación que utilizan los agentes estatales para informar sus actividades y analizar las concepciones que tienen los campesinos de estas experiencias, para contribuir a mejorar la fluidez entre ambos actores.

Respecto a los programas sociales parecen tener mayor alcance y una buena recepción en la comunidad, aunque los entrevistados de mayor edad manifiestan reticencias respecto al uso que les dan los jóvenes. Según nos comentaban, muchas veces se les dificulta conseguir gente para trabajar o que se interesen en producir, dado que la tierra implica mucho trabajo y “los jóvenes se conforman con los planes sociales que es más fácil”. En la zona se encuentra una gran cantidad de programas sociales estatales nacionales provenientes del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, etc.

Retomando las acciones que realiza el INTA en la zona, se visualiza que en la provincia de Salta, para el valle Calchaquí específicamente, se encuentra vigente un Programa Regional con Enfoque Territorial-PRET orientado a empoderar su desarrollo endógeno. Estos programas tienen como objetivo fortalecer la inclusión social y el desarrollo territorial, integrando las economías regionales y locales a los mercados internos e internacionales, y generando empleos para revertir la situación de pobreza. En este marco, se organizan diversas actividades como ferias de semillas, muestras artesanales, etc. El objetivo del PRET en particular es:

Promover procesos de desarrollo endógeno para una transformación integral de los territorios a través de acciones dirigidas a la innovación organizacional, tecnológica e institucional en las comunidades locales y en los sectores agropecuarios, agroindustriales, artesanales, y de servicios. (INTA, <http://inta.gob.ar/proyectos/prets-11>)

Los pobladores tienen una buena imagen de las actividades que desarrolla el INTA de Seclantás, ubicado en el departamento de Molinos. La organización CUM (Comunidades Unidas de Molinos) conformada en 2001, nuclea a varias comunidades de Molinos y ha trascendido como un aspecto relevante y muy valorado asociado a la institución. Esta organización CUM trabaja de manera colectiva con el equipo técnico de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Seclantás y la ONG Red Valles de Altura, para solucionar problemas significativos como el acceso al agua, el mejoramiento de condiciones dignas de habitabilidad, el avance productivo (agricultura, ganadería, artesanías), el incremento de la comercialización, entre otros (Cieza, 2010). Estas acciones promueven la voluntad de los campesinos de Cachi para que el organismo ingrese en el departamento y gestione programas que los ayuden a mejorar sus condiciones.

Por otra parte, la municipalidad de Cachi trabaja actualmente en conjunto con el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales-PROSAP gestionando proyectos para los pequeños productores en dos líneas, una dedicada a infraestructura y otra principalmente a maquinaria. El programa comprende el otorgamiento de créditos con un

subsidio del 40% del total de la inversión que se realice, y está destinado a cooperativas o personas físicas que deben ser propietarias de la tierra o presentar un contrato de arriendo. En este sentido adquiere vigencia la crítica de Manzanal (1987) respecto a los programas implementados en esa época, dado que no solucionan el problema estructural de los campesinos, aunque reconoce en su propia definición que estos sujetos puedan tener dificultad para el acceso a la tierra. Además, los beneficiarios deben idear y presentar proyectos con los emprendimientos que les gustaría realizar en caso de que les otorgaran el crédito. Si bien reciben asesoramiento, algunos de los entrevistados que se han postulado mencionan que esta instancia suele ser dificultosa, además de otros requisitos como viajar por ejemplo a Salta para resolver cuestiones administrativas. Una vez presentados, los proyectos son evaluados por la Secretaría de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta. Posteriormente el PROSAP gestiona la entrega de la maquinaria (tractores, acoplados, rastras, etc.) o el dinero. Hasta el momento en que se realizó el trabajo de campo de 2015, se encontraban en evaluación alrededor de veintidós proyectos y aún no sabemos a cuántas personas se los van a otorgar. Desde este programa, además, se organizan eventos como ferias de semillas y otras actividades que congregan y ponen en contacto a los productores del departamento. También para 2015, se encontraba en formación un Centro de Emprendedores regionales dependiente del gobierno de Salta, que pretende brindar herramientas técnicas y financieras para el desarrollo de emprendimientos a los jóvenes de la región para que permanezcan en su lugar de origen.

Discusión y conclusiones

En los párrafos anteriores hemos intentado avanzar en la caracterización general de la organización productiva campesina del valle, vinculada a un análisis de las políticas productivas que históricamente se han impulsado hacia el sector, tal que nos permita ensayar un diagnóstico de la situación de los campesinos vallistas, en particular de Cachi. De todos modos, este trabajo representa una primera contribución a la indagación en estas temáticas, por lo que se deberá profundizar en futuros avances.

A partir de los datos presentados, es posible esbozar algunas interpretaciones que se vinculan con el rol asumido por el Estado frente a la realidad agraria de la región en cuestión. En tal sentido, se observa que si bien se dirigen políticas hacia el sector campesino, tienen en general un enfoque superficial que atiende a resolver cuestiones productivistas, pero no parece observarse un tratamiento detenido de las problemáticas de fondo: el acceso a la tierra, el derecho al agua y la ausencia de regulación en la comercialización y cadena productiva.

En cuanto al acceso a la tierra, el principal problema lo representa la irregular situación de los títulos de propiedad y la estructura parcelaria de la zona, que coloca a los campesinos en una comprometida situación de vulnerabilidad y hace que muchas veces los productores se vean obligados a arrendar en las condiciones que imponga el dueño de la tierra. Este tipo de relaciones reproduce situaciones de desigualdad basadas en estructuras de poder coloniales que generan sometimiento, y están naturalizadas al punto que ni siquiera se establecen contratos formales. Esta condición, además, hace que muchos de los productores se vean excluidos de los programas vigentes al no cumplir los requisitos, dado que, como hemos visto, suelen pedirles el título de propiedad o el contrato de arriendo certificado.

Por otro lado, cuestiones como el acceso al agua y otras de infraestructura en general son postergadas e invisibilizadas por los sectores competentes. Hay sectores del valle que no cuentan con agua potable, sumado a que muchas veces el turno de riego

otorgado no alcanza a suplir sus necesidades. Por otra parte, los entrevistados hacen referencia a las malas condiciones de la Ruta Nacional n° 40 y la falta de pavimento en accesos importantes que dificultan la comercialización con otras regiones. Si bien desde el programa PROSAP vigente para la zona las autoridades preveen realizar acciones de este tipo, hasta el momento estas no se reflejan en obras concretas.

Además, como se ha mencionado, si bien hay acuerdos sobre el establecimiento de los precios –por ejemplo del pimiento– a nivel municipal y provincial, dichos valores se refieren a la venta entre el intermediario y el mercado, y no se reflejan en el precio al que comercializa el campesino. Además la acción es muy individual, y si bien los entrevistados más jóvenes expresan la importancia de empoderarse mediante el establecimiento de cooperativas para, por ejemplo, contar con molinos de uso comunitario y así agregarle valor y vender el producto terminado en mejores condiciones, entre los mayores existe desconfianza en este tipo de instituciones debido a las experiencias fallidas de las cooperativas anteriores.

De esta manera, es indispensable pensar en la importancia del rol del Estado en la regulación y establecimiento de mejores condiciones para los campesinos en el proceso productivo, en la negociación de precios, en el acceso a nuevas tecnologías, etc. En este sentido, las políticas públicas que se han planteado en los últimos años contribuyen a mejorar estas condiciones. Si bien están pensadas para sujetos rurales como el “pequeño productor” o el “agricultor familiar”, se produjeron avances en cuanto a la visibilización del sector y la promoción de acciones para mejorar sus modos de vida, desde un enfoque más abarcativo que el netamente economicista. De todos modos, estos sujetos se contemplan y definen desde el paradigma del capitalismo agrario, y por tanto el “campesino” y cuestiones propias de su idiosincrasia no son considerados y en consecuencia no se avanza en acciones que apunten a sus problemáticas. Para ello, es importante revisar el aparato conceptual desde el que se piensan las acciones y explicitarlo, además de realizar buenos diagnósticos.

En Latinoamérica debemos pensar las “ausencias” que quedan enmascaradas tras la racionalidad hegemónica occidental, y asumir que existen otros saberes y realidades igualmente válidos, otras temporalidades, formas de entender las diferencias que no se basan en jerarquías, y de concebir la naturaleza y los modos de producción, que no necesariamente deben responder al productivismo capitalista (de Sousa Santos, 2006). Por lo tanto, coincidimos con Hocsman (2014) en que se debe evitar reemplazar acriticamente el concepto de “campesino”, ya que conlleva invisibilizarlo como sujeto de derecho, negarle su identidad, diversidad cultural, historicidad, modo de vida y las luchas de clase propias de este sector.

Agradecimientos

Agradecemos a nuestra directora, la Dra. María Cecilia Páez, por su formación, confianza y constante dedicación. A la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el financiamiento del trabajo de campo. A Alexis Capristo, por la traducción de los resúmenes al francés e inglés. A los pobladores de Cachi, por su hospitalidad, cariño y calidez. También agradecemos a los evaluadores del manuscrito por sus importantes contribuciones.

 **Notas**

1. En primera instancia, las entrevistas realizadas han sido generales y abiertas, aunque siguiendo ejes temáticos preestablecidos en relación a los objetivos de la investigación en la que se enmarca este trabajo. Hemos entrevistado de manera aleatoria a más de treinta personas del departamento, registrando en el cuaderno de campo la información más relevante. Estos primeros contactos han sido fundamentales para desarrollar confianza y establecer entrevistas con mayor profundidad a personas consideradas representativas para los ejes establecidos. Se han realizado dieciocho entrevistas semiestructuradas en profundidad a pobladores de Cachi, Cachi Adentro y Payogasta, relacionados directa o indirectamente con las prácticas agrícolas. Se relevaron en las entrevistas aspectos relacionados con la organización de la producción agrícola: tipo, organización y formas de producción, ciclos de cultivo, riego, aspectos rituales y festivos vinculados, relaciones con el Estado y otras instituciones (si se recibe alguna ayuda estatal, qué proyectos se conocen por la zona y quiénes pueden acceder a ellos, entre otros), destino de la producción (autoconsumo, trueque, venta), circuito de comercialización, actores involucrados, etc.
2. Arrendamiento: contrato por el cual el productor paga el arriendo en pesos o producción al propietario por el uso de la tierra; otra forma de pago consiste en prestar mano de obra por una cantidad de días al patrón (Manzanal, 1987). Cieza (2010) diferencia para el valle Calchaquí la figura del arrendero de la del arrendatario: “Los arrenderos se caracterizan por ser productores de subsistencia en el interior de unidades territoriales mayores: las fincas. La forma de pago de los arriendos es mediante el trabajo en estas explotaciones. Los arrendatarios explotan una determinada extensión de tierra bajo contrato –formal o informal– mediante el pago a su propietario de una cantidad determinada en dinero o especies” (*ibid.*: 36).
3. En la bibliografía consultada se menciona con frecuencia este tipo de contratos, bajo el concepto de “mediería”. Consiste en un acuerdo en que el productor recibe la tierra preparada para el trabajo y al momento de la cosecha debe entregar la mitad de su producción al propietario (Manzanal, 1987; Sola, 1987; Cieza, 2010).

Bibliografía citada

- » Archetti, E. y Stölen, K. (1975). *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- » Arqueros, M. X. y Manzanal, M. (2004). “Interacciones y vinculaciones interinstitucionales para el desarrollo territorial-rural: el caso de San Carlos en Salta”. Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales del NOA. Universidad Nacional de Salta.
- » Barbeta, P., Domínguez, D. y Sabatino, P. (2012). “La ausencia campesina en la Argentina como producción científica y enfoque de intervención”. En *Mundo Agrario* 13 (25). Revista *on line* de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n25a03/2267>
- » Bartra, A. (2006). *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*. México, UACM-ITACA-CEDRSSA.
- » Bayón de Torena, N. A. (2010-2011). “Experiencia participativa para la introducción de variedades de quínoa en La Poma y Cachi- Salta”. En *Revista Agraria* 5(12), 15-23. Jujuy.
- » Cáceres, D. (2003). “El Campesinado Contemporáneo”. En Thornton, R. y Cimadevilla, G. (eds.). *La Extensión Rural en Debate. Concepciones, Retrospectivas, Cambios y Estrategias para el MERCOSUR*. Buenos Aires, INTA (en prensa).
- » Carballo A., Bramuglia, G., Gras, C., Plano, J., Rossi, C. y Tsakoumagkos, P. (2004). *Articulación de los pequeños productores con el mercado: limitantes y propuestas para superarlos*. Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Dirección de Desarrollo Agropecuario. Serie Estudios e Investigaciones n° 7. PROINDER
- » Censo Nacional Agropecuario (2002). INDEC. Disponible en: <http://www.indec.mecon.gov.ar/agropecuario/cnaz.asp>
- » Cieza, G. L. (2010). “Procesos organizativos y acceso a la tierra en el Valle Calchaquí”. Tesis Doctoral. La Plata, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.
- » CIPAF NOA (2008). *Boletín* n° 14.
- » de Sousa Santos, B. (2006). “La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes”. En *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo>
- » Dirección General de Estadísticas, Salta. (2013). *Anuario Estadístico Provincia de Salta: Año 2012-Avance 2013*. 1ª ed.
- » Fernandes, B. M. (2004). “Cuestión Agraria: conflictualidad y Desarrollo territorial”. Texto presentado en los Seminarios en el Lincoln Center Institute of Land Policy. Harvard University.
- » ———. (2013). “Cuando la agricultura familiar es campesina”. En Hidalgo, F., Houtart, F. y Lizárraga, A. P. (eds.). *Agriculturas campesinas en Latinoamérica: propuestas y desafíos*, 1º ed., pp. 19-34. Quito, IAEN.
- » Frere, P. (2004). “Consultoría: Diagnóstico sobre la población objetivo de las políticas de desarrollo rural de la Provincia de Salta”. Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dirección de Desarrollo Agropecuario. PROINDER.

- » FONAF (2006). Documento: “Lineamientos generales de políticas públicas orientadas a la elaboración de un plan estratégico para la agricultura familiar”. Buenos Aires.
- » Godelier, M. (1974). *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- » Guzmán Gómez, E. (2014). “Alimentación, soberanía y agricultura campesina”. En Hidalgo, F., Houtart, F. y Lizárraga, A. P. (eds.). *Agriculturas campesinas en Latinoamérica: propuestas y desafíos*, 1º. ed., pp. 217-228. Quito, IAEN.
- » Hocsman, L. D. (2010). “Campesinos y productores familiares, en el desarrollo territorial rural en Argentina. Paradigmas y horizontes políticos, aportes al debate”. En VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. Porto de Galinhas, ALASRU.
- » ———. (2014). “Campesinado y Agricultura Familiar; aportes para un debate ausente en el desarrollo rural en Argentina”. En *Veredas* 28, 273-295. Universidad Autónoma Mexicana.
- » INTA (2008). Zonas agroeconómicas homogéneas: Salta-Jujuy. Estudios socio-económicos de la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales. N° 7.
- » ———. (2016). Resumen Ejecutivo del Proyecto Regional con Enfoque Territorial (Cartera 2013-2019): Fortalecer el desarrollo endógeno del Valle Calchaquí Salteño. Disponible en: <http://inta.gob.ar/proyectos/SALJU-1232101> (última visita 09/05/2016).
- » ———. (2015). “Quinua: un cultivo ancestral”. Disponible en: <http://inta.gob.ar/noticias/quinua-un-cultivo-ancestral>
- » Llambí, L. (1981). “Las unidades de producción en un intento de teorización”. En *Estudios Rurales Latinoamericanos* 4 (2), 121-153.
- » Lera, M. E. (2005). “Transformaciones económicas y sociales en el departamento de Cachi (Salta) a fines del siglo XIX”. En *Mundo Agrario* 6:11. Revista on line de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/vo6n11a07>
- » Manzanal, M. (1987). “Pobreza y marginalidad en el Agro Argentino: la producción agrícola y su comercialización en Cachi, Salta”. En *Eso* n°22. Buenos Aires, Centro de Estudios Urbanos y Regionales.
- » ———. (1998). “Vicisitudes de la comercialización de hortalizas entre los pequeños productores agropecuarios (el caso de la producción de tomate fresco en Cachi, Salta)”. En *Realidad Económica* 153, 58-75. Buenos Aires.
- » Mata de López, S. E. (2005). *Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia*. CEPIHA.
- » Mayer, E. (2004). “Cultura, mercados y economías campesinas en los Andes”. En *Revista de Antropología* 2 (2), 47- 78. Lima.
- » Nogueira, M. E. (2013). “Agricultura familiar y políticas públicas en la Argentina de los últimos años. Algunas reflexiones en torno a una relación compleja”. En *Trabajo y Sociedad* 21, 49-66.
- » Obschatko, E. S., Foti, M. y Román, M. (2007). “Los pequeños productores en la República Argentina: importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- » Pais, A. L. (2011). “Las transformaciones en las estrategias de reproducción campesinas en tiempos de globalización. El caso de Cachi en los Valles Calchaquíes”. Tesis doctoral. Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba.

- » Paz, R. (2006). “El campesinado en el agro argentino: ¿repensando el debate teórico o un intento de reconceptualización?”. En *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 81, 65-85.
- » ———. (2010). “Hablemos sobre agricultura familiar: siete reflexiones para su debate en Argentina”. En López-Castro, N. y Prividera, G. (comps.). *Repensar la agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana*, pp. 287-306. Buenos Aires, Ciccus.
- » ———. (2011). “Agricultura familiar en el agro argentino: una contribución al debate sobre el futuro del campesinado”. En *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 91, 49-70.
- » Páez, M. C., Giovannetti, M. y Raffino, R. (2012). “Las Pailas. Nuevos aportes para la comprensión de la agricultura prehispánica en el Valle Calchaquí Norte (provincia de Salta)”. En *Revista Española de Antropología Americana* 42 (2), 339-357.
- » Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (2005). Documento Base.
- » Ringuélet, R. (1991). “Cuestión agrícola y cuestión agraria en la Región Pampeana”. En Ringuélet, R. (comp.). *Cuestiones agrarias regionales*. La Plata, Estudio e investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, UNLP.
- » Shanin, T. (1976). *Naturaleza y lógica de la economía campesina*. Barcelona, Anagrama.
- » Schejtman, A. (1980). “Economía campesina, lógica interna, articulación y persistencia”. *Revista de la CEPAL*. México.
- » Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ambiente. (1997). Documento de estrategia.
- » Sola, M. F. (1987). “Fincas y economía doméstica. Organización socioproductiva en el Norte del Valle Calchaquí”. Salta. (Inédito).
- » Soverna, S., Tsakoumagkos, P. y Paz, R. (2008). *Revisando la definición de agricultura familiar*. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Buenos Aires, 1^o ed.
- » Tarragó, M. N. (1977). “La localidad arqueológica de Las Pailas, provincia de Salta, Argentina”. En *Actas del VII Congreso de Arqueología de Chile*, vol. II, 499-517.
- » Torres Adrián, M. (1985). *Familia, trabajo y reproducción social: campesinos en Honduras*. México D. F., PISPAL/Colegio de México.
- » Tsakoumagkos, P., Soverna, S. y Craviotti, C. (2000). *Campesinos y pequeños productores en las regiones agroeconómicas de Argentina*. Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección de Desarrollo Agropecuario (PROINDER). Buenos Aires.

Gimena Alé Marinangeli

Licenciada en Antropología por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Integrante del Proyecto de Investigación “La construcción del Paisaje Agrario en el Valle Calchaquí Norte. Manejo de la tierra y relaciones sociales en Las Pailas (Cachi, Salta)”, a cargo de la Dra. María Cecilia Páez (Conicet). Actualmente cursa la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y está inscrita en el Doctorado en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.

Ignacio Gabriel Plastiné Pujadas

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Integrante del Proyecto de Investigación “La construcción del Paisaje Agrario en el Valle Calchaquí Norte. Manejo de la tierra y relaciones sociales en Las Pailas (Cachi, Salta)”, a cargo de la Dra. María Cecilia Páez (Conicet).